

Cómo citar este trabajo: Sánchez Hernández, J.L., Moro Gutiérrez, L., & Sierra Gómez, T. (2025). Opportunities and Constraints for Food Transition and Territorial Development in Low-Density Rural Areas (Salamanca and Zamora, Spain). *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (103). <https://doi.org/10.21138/bage.3586>

Oportunidades y limitaciones para la transición alimentaria y el desarrollo territorial en territorios rurales de baja densidad (Salamanca y Zamora)

Opportunities and Constraints for Food Transition and Territorial
Development in Low-Density Rural Areas (Salamanca and Zamora, Spain)

José Luis Sánchez Hernández 

jlsh@usal.es

*Departamento de Geografía
Universidad de Salamanca (España)*

Lourdes Moro Gutiérrez 

moro@usal.es

*Departamento de Psicología Social y Antropología
Universidad de Salamanca (España)*

Teresa Sierra Gómez 

teresgz@usal.es

*Departamento de Geografía
Universidad de Salamanca (España)*

Resumen

La producción, distribución y consumo de alimentos elaborados con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social se articula con frecuencia a través de redes ciudadanas territorializadas que propugnan un modelo alimentario basado en la proximidad geográfica. Este artículo analiza la aportación de estas redes alimentarias al desarrollo territorial en las provincias de Salamanca y Zamora, muy afectadas por la despoblación y la dispersión de los centros de producción y consumo. Tras compilar un inventario de casos activos, se ha entrevistado a una muestra de iniciativas representativas de todos los eslabones de la cadena de valor. La información recogida permite profundizar en tres cuestiones. Primera, los valores y objetivos que persiguen sus promotores. Segunda, su arraigo en este frágil territorio, fundamental para evaluar su contribución económica, social, ambiental y de gobernanza. Y tercera, las limitaciones que el entorno territorial y el marco institucional y de gobernanza imponen al fortalecimiento de estas iniciativas. Se concluye que el capital social que subyace en estas redes alimentarias es el recurso fundamental que sostiene su capacidad para aprovechar el capital natural del territorio, a pesar de las limitadas capacidades económicas y del desigual apoyo que reciben por parte de las Administraciones Públicas.

Palabras clave: valores; capital social; redes alimentarias sostenibles; gobernanza; Castilla y León.

Abstract

The production, distribution, and consumption of food under environmental, economic, and social sustainability criteria are often embodied in territorial civic networks that strive for an alternative food system founded on geographical proximity. This article assesses the contribution of such food networks to territorial development in the provinces of Salamanca and Zamora (Spain), severely constrained by depopulation and the dispersion of production and consumption centres. After compiling an inventory of active networks, a sample of initiatives across all the stages in the value chain was interviewed in depth. The information recorded sheds light onto three key topics. First, the values and objectives aimed at by their stakeholders. Second, their embeddedness in this weak territory, key to assessing their contribution to economic, social, environmental and governance development. Third, the limitations raised by the territorial context and the institutional and governance framework to the strengthening of these initiatives. It is concluded that the social capital underlying these food networks is the fundamental resource that sustains their ability to leverage the natural capital of the territory, despite the limited economic capacities of these networks and the unequal support they receive from public administrations.

Key words: values; social capital; sustainable food networks; governance; Castilla y León.

1 Transición alimentaria y desarrollo territorial en espacios de baja densidad

1.1 La transición alimentaria: una propuesta conceptual

Desde que la Unión Europea adoptara como líneas de acción prioritaria, para el período de programación 2021-2027, la transición digital y la transición ecológica, la noción de “transición” ha ganado popularidad como concepto útil para la interpretación de los procesos económicos, sociales y territoriales. La Unión reconoce además la necesidad de que esa “doble transición” sea socialmente justa y ha dotado un fondo específico (Comisión Europea, en línea) para compensar los impactos económicos y laborales de la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. No hay que olvidar que tales impactos se concentran en determinadas regiones europeas donde, no por casualidad, aflora el “descontento verde” (Rodríguez-Pose & Bartalucci, 2023), un movimiento sociopolítico de contornos difusos protagonizado por quienes se sienten perjudicados por las políticas de impulso a la transición ecológica en la minería, la agricultura, la ganadería, la industria y el transporte.

La cara más visible de la transición ecológica es la “transición energética”, dirigida a la descarbonización del suministro de energía y la paralela difusión de fuentes primarias de energía renovable. Los avances en este proceso son notables en la Unión Europea, donde la producción energética primaria renovable significó el 40,8 % del total generado en 2021 y el 17,2 % del consumo, según EUROSTAT (en línea); en España esos valores fueron del 57 % y el 15,8 %, respectivamente.

La “transición alimentaria” es otra faceta de la transición ecológica que ha ganado protagonismo desde la pandemia de Covid-19 y la aprobación de influyentes documentos de planificación indicativa por parte de la Unión Europea (*Pacto Verde, estrategia De la Granja a la Mesa*). Ahora bien, en los países avanzados, la difusión de modalidades de producción y consumo de alimentos más respetuosos con la naturaleza se remonta, al menos, a mediados de la década de 1980, cuando las indicaciones geográficas de calidad y la agricultura ecológica certificada comienzan a ganar cuota de mercado ante la sucesión de escándalos de salud pública provocados por la venta de alimentos industriales intoxicados (Whitworth et al., 2017). Desde entonces, en un proceso donde demanda y oferta se refuerzan mutuamente, el sistema agroalimentario ha incorporado técnicas de producción, procedimientos de distribución y patrones de consumo orientados, de forma explícita o implícita, hacia la “transición alimentaria” o, como también se la denomina,

“transición agroalimentaria”; en este texto se opta por el primer término, por ser el más utilizado en la literatura especializada.

Pero, ¿qué se entiende por ‘transición alimentaria’? Este artículo propone la siguiente definición: el proceso social (es decir, económico, político y cultural) que, a distintas escalas geográficas, construye un sistema de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos más sostenible en cuanto al uso de los recursos naturales, más equitativo en cuanto al reparto del valor económico generado, o más localizado y atento a la reconexión material y moral entre productor, producto y consumidor.

Esta definición apunta a un concepto tridimensional anclado en la sostenibilidad ambiental, la justicia socioeconómica y la proximidad geográfica. El cuarto pilar, inherente a la idea de ‘transición’, es su naturaleza diacrónica. La transición alimentaria no es un proceso teleológico con un estado final predeterminado, sino una trayectoria en redefinición permanente que aspira a la transformación progresiva de un sistema alimentario industrializado y dominado por grandes corporaciones que causa graves estragos ambientales, trastornos de salud pública, reparto desigual de la riqueza y una marcada desterritorialización de los alimentos (Sage, 2022).

El impulso a la transición alimentaria (TA, en adelante) procede de un conjunto multiforme de actores con capacidades, prácticas y objetivos diversos y hasta contrapuestos. Compañías multinacionales, productores artesanos de lujo, personas veganas, ganaderos extensivos tradicionales, investigadores científicos o activistas de la soberanía alimentaria, por citar sólo algunos protagonistas, aspiran a transformar el sistema alimentario como medio para proteger la naturaleza, cuidar la salud, conservar la agricultura familiar, reivindicar los alimentos locales, rentabilizar los nuevos nichos de consumo o expandir el potencial de las nuevas biotecnologías de producción. Esta diversidad de propósitos convierte a la TA en un proceso complejo que avanza a ritmos muy dispares y condicionados por el contexto geográfico donde operan sus actores.

La sostenibilidad ambiental, primero, es el pilar de la TA que concita más atención, dada la creciente presión regulatoria en pro de unas prácticas agroindustriales respetuosas con la naturaleza y la sensibilidad que segmentos crecientes de la población muestran hacia las implicaciones ambientales y éticas de los alimentos que consumen. La reacción de las corporaciones alimentarias al doble estímulo de la normativa y del consumo se ha traducido en una oferta creciente de alimentos con certificación ecológica y en un discurso (eslóganes, etiquetas, logotipos) que asocia su imagen con la responsabilidad medioambiental en sentido

amplio, incluyendo el bienestar animal, la filosofía vegana o el abastecimiento en proximidad. En la misma línea cabe situar el sector *food-tech*, compuesto por pequeñas empresas (*start-ups*) que desarrollan y comercializan nuevas sustancias alimenticias elaboradas a partir de fuentes alternativas de proteínas (algas, insectos, vegetales, células madre) y de una utilización intensiva de la biotecnología (Mouat et al., 2019; Potente, 2024). A estos actores que confían en el mercado y la tecnología como palancas de la transición alimentaria desde la oferta, se suman otros desde la distribución y el consumo: supermercados con lineales dedicados a los alimentos orgánicos, pequeñas tiendas especializadas en esta gama de productos (sobre todo transformados), y establecimientos hosteleros dirigidos a una clientela preocupada por su salud o comprometida con el respeto a la naturaleza.

Segundo, la justicia socioeconómica, entendida como el establecimiento de mecanismos de intercambio que distribuyan el valor económico de manera más equitativa entre los actores de la cadena alimentaria a través de procedimientos participativos de toma de decisiones, es el objetivo de otras fórmulas críticas de provisión de alimentos. Destacan la agricultura sostenida por la comunidad (CSA en sus siglas inglesas), los sistemas participativos de garantía (SPG), los grupos de consumo, los mercados de productores, la venta directa (en finca, sistemas de cestas, o a través del comercio electrónico), los obradores colectivos, los centros de acopio o los supermercados cooperativos. Estos mecanismos de reconexión entre producción y consumo de alimentos se han calificado bajo el término “redes alimentarias alternativas” (Sánchez, 2009), a partir del cual ha proliferado una amplia gama de variaciones sobre el mismo tema (ver Reckinger, 2022 para una sólida taxonomía conceptual y terminológica).

Estas modalidades de provisión de alimentos coinciden en reducir el número de intermediarios entre producción y consumo para rebajar los márgenes comerciales y reducir los precios de venta sin merma de los ingresos para los productores. En muchos casos, los precios se fijan de forma compartida entre los participantes en estas redes, bajo la premisa de que tales precios deben habilitar un acceso asequible a los compradores y unos ingresos dignos a los vendedores. La cuestión de la sostenibilidad no es ajena a las preocupaciones de estas redes alimentarias. Pero su abordaje es muy diferente al que muestran el segmento *food-tech* y las corporaciones dominantes. Mientras éstas ponen el acento en el producto (tecnologías, certificaciones) y su inocuidad para la salud y la naturaleza, las redes alternativas conciben la sostenibilidad ambiental y la socioeconómica como elementos de un único ecosistema. Están integradas, casi siempre, por nodos de producción, distribución y consumo de muy pequeño tamaño por donde circulan alimentos certificados, pero también otros avalados por la confianza consolidada entre los

participantes gracias a la interacción personal sostenida en el tiempo. Es la confianza en la persona que produce la que confiere un doble valor, social y ambiental, al alimento intercambiado. Es la perspectiva que defiende la agroecología: una agricultura familiar, alineada con las ideas sobre la soberanía alimentaria, que trabaja las variedades vegetales y animales mejor adaptadas al medio y recurre a prácticas de acreditada eficacia (regeneración de suelos, cierre de ciclos en la explotación, limitado uso de la maquinaria, intercambio de semillas) más allá del rechazo a los agroquímicos de síntesis que caracteriza a la producción ecológica certificada (González de Molina & López García, 2021).

Tercero, la proximidad geográfica sustenta facetas bien conocidas de la TA, como las denominaciones de origen y demás figuras de calidad vinculadas al lugar de procedencia de los alimentos. La literatura sobre su impacto en el desarrollo regional y rural detecta efectos positivos en generación de empleo, retención de rentas, protección de la biodiversidad y creación de una imagen positiva de los territorios productores (European Commission, 2021; Crescenzi et al., 2022). Pero hay otras propuestas que también defienden un sistema alimentario menos intensivo en distancia y más anclado en el territorio, como los parques agrarios, los bancos de tierras, la agricultura urbana o los programas de compra responsable emprendidos por centros educativos, sanitarios o asistenciales que priorizan el abastecimiento alimentario local y conciben el presupuesto público como una palanca para estimular la producción de alimentos saludables en el entorno geográfico más cercano.

Ahora bien, es necesario subrayar que las iniciativas orientadas a la justicia socioeconómica, y numerosos pequeños productores ecológicos certificados, incorporan de forma más o menos explícita la proximidad geográfica, la defensa del territorio, la revitalización del mundo rural y la reconexión entre campo y ciudad como objetivos de su quehacer cotidiano. La sostenibilidad, así entendida, tiene un fundamento territorial que integra naturaleza, economía y comunidad en un marco de cercanía geográfica donde pueden desarrollarse los vínculos de confianza entre los actores de la cadena de valor y las políticas públicas imprescindibles para el avance de la TA. La biorregión, que es un marco geográfico de vida donde las necesidades humanas básicas (agua, energía, alimentos) se satisfacen preferentemente con recursos locales, encarnaría ese modelo integral de sostenibilidad (Feagan, 2007) próximo a los postulados de la agroecología. Propuestas como los Proyectos Alimentarios Territoriales (PAT) franceses avanzan en esa dirección, conectando productores, distribuidores y consumidores cercanos para re-localizar el circuito de la alimentación (Banzo et al., 2024).

En definitiva, la TA tiene una inequívoca dimensión geográfica, aunque no todos los actores que la impulsan persigan objetivos territoriales de manera explícita. Este es el punto de partida de este trabajo, que analiza la aportación de las redes alimentarias sostenibles al desarrollo territorial en las provincias de Zamora y Salamanca.

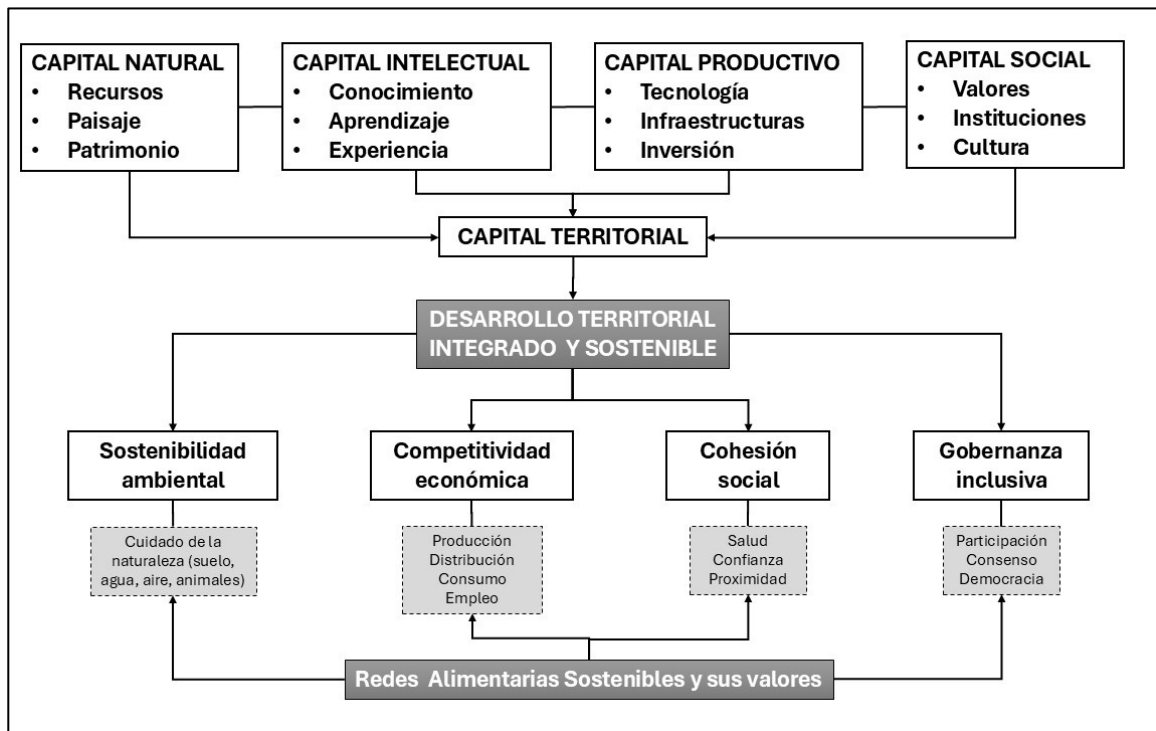
1.2 Redes alimentarias sostenibles y desarrollo territorial. Aportaciones de la literatura especializada

Las redes alimentarias sostenibles (RAS) pueden definirse como modalidades de organización de la producción, distribución y consumo de alimentos (y de coordinación entre estas actividades) cuyos principios y prácticas promueven un modelo alimentario respetuoso con la naturaleza y la salud, establecen una distribución del valor económico más equitativa entre los actores involucrados, minimizan el número de intermediarios, operan preferentemente en condiciones de proximidad geográfica y se rigen por mecanismos inclusivos y democráticos de toma de decisiones sustentados en la confianza mutua entre las personas participantes. Si, además, se entiende el desarrollo territorial (DT) como la activación del capital territorial (entendido como la combinación sinérgica del capital natural, el capital social, el capital productivo y el capital humano de un territorio determinado) para conseguir mayor competitividad económica y cohesión social en condiciones de sostenibilidad ambiental y a través de procesos de gobernanza participativa (Albertos et al., 2004), es fácil identificar las contribuciones potenciales de las RAS al DT, como propone la Figura 1.

Así definidas, las RAS propugnan un modelo alimentario compatible con la consecución de los cuatro objetivos del desarrollo territorial mediante la combinación de los cuatro componentes del capital territorial.

- Se fundamentan en el aprovechamiento de recursos agropecuarios adaptados a las condiciones locales y en su gestión con procedimientos respetuosos con el entorno natural, lo que no impide el empleo de técnicas avanzadas de transformación o comercialización de las producciones.
- Sus fines son económicos en el sentido de que requieren un umbral de rentabilidad suficiente para que productores y distribuidores puedan ganarse la vida con dignidad. Disponen, por regla general, de recursos materiales suficientes para el desempeño de sus funciones, aunque son iniciativas de (muy) pequeño tamaño en cuanto a capital, plantilla o facturación.

Figura 1. Capital territorial, desarrollo territorial y valores de las redes alimentarias sostenibles



Fuente: elaboración propia

- Las relaciones entre los participantes combinan la búsqueda del beneficio con la defensa de la cohesión social a través, por ejemplo, de la fijación conjunta de precios entendidos como justos, o de la programación periódica de actividades de encuentro y formación en materia de alimentación sostenible y saludable. Es frecuente la autolimitación del volumen de las producciones para garantizar su calidad ante los consumidores y preservar la confianza de los participantes.
- Cuando se trata de iniciativas donde intervienen producción, distribución y consumo, se establecen procedimientos deliberativos de gestión y de toma de decisiones, como asambleas periódicas o rotaciones de las tareas necesarias para el funcionamiento de la actividad. Esta gobernanza participativa interna se combina con colaboraciones con otras RAS en la logística o la compra compartida de insumos.
- Los recursos de conocimiento incorporados a las RAS aúnan el saber hacer campesino/artesano tradicional con conocimientos técnicos formales, necesarios para el cumplimiento de los requisitos de las normativas oficiales de certificación y salubridad.

Esta coherencia entre RAS y DT explica que algunas publicaciones hayan considerado el impacto de las primeras sobre los territorios donde se localizan. Su número es reducido (Filippini et al.,

2023), pese a que desde comienzos del siglo XXI se señaló la relevancia de esta cuestión y se aportaron indicios muy generales para varios Estados Miembros de la Unión Europea: Renting et al. (2003) afirman que alrededor del 20 % de las explotaciones agrarias de la UE-15 vendían parte de su producción por canales cortos; ese porcentaje era mayor en los países mediterráneos (España, Italia y Francia), donde predominaban los atributos de calidad asociados a la tradición y el origen geográfico debido a la menor incidencia del productivismo en comparación con Estados como Alemania, Reino Unido o Países Bajos, donde han arraigado más las certificaciones ecológicas y el respeto al bienestar animal.

Un primer conjunto de trabajos aplica técnicas econométricas para estimar el impacto de las RAS en su entorno geográfico. Hughes e Isengildina-Massa (2015) recurren a la Matriz de Contabilidad Social (SMA-Social Accounting Matrix) para medir los efectos económicos de los mercados de productores impulsados por la “Certified South Caroline Grown Campaign” en Carolina del Sur (Estados Unidos). Los productores señalan que estas campañas aumentan sus ventas y su rentabilidad porque generan más asistencia a los mercados, si bien esos márgenes crecen en porcentajes modestos, en torno al 10 %.

Kłoczko-Gajewska et al. (2024) calculan el efecto multiplicador local mediante el programa LM3-Local Multiplier 3 (desarrollado por la New Economics Foundation) para 122 explotaciones agrarias de Francia, Reino Unido, Italia, Hungría y Polonia. Asumen que el sector primario, atado al territorio, tiene más potencial multiplicador local porque adquiere más insumos en un radio de acción corto. Así, no encuentran diferencias significativas entre los impactos de los productores vinculados a canales cortos o largos de comercialización, pues ambos contratan empleados y adquieren insumos en su entorno local. Ahora bien, sí que observan que los productores más dependientes de canales cortos cumplen funciones adicionales relevantes, como la conexión con consumidores locales, la oferta de alimentos frescos y de calidad, el menor empleo de envases y empaquetados, o el fortalecimiento de los lazos de confianza entre las comunidades locales. También Filippini et al. (2023) recurren a esta aplicación LM3 para calcular el impacto de un mercado de productores en la provincia italiana de Parma. Encuentran unos resultados positivos pero modestos, dada la pequeña dimensión económica de estas iniciativas y su condición de nicho de producción orientado a consumidores comprometidos con la salud, el medio ambiente o el desarrollo del entorno rural.

Mundler y Laughrea (2016) estudian las RAS de tres comarcas quebequesas y detectan que generan más empleo que los canales convencionales por cada explotación agraria implicada y

que ese empleo es más cualificado y con mayor presencia femenina. Destacan también la fuerte presencia de productores certificados, la aplicación de prácticas sostenibles de gestión que van más allá de los requisitos reglamentarios, y el cultivo de variedades poco habituales en los canales convencionales. Por tanto, los efectos ambientales son dignos de mención, aunque el peso de estas RAS en la economía local es poco apreciable, lo mismo que el efecto sobre los ingresos de los productores. Los mayores beneficios se sitúan, otra vez, en el terreno social, pues los productores declaran su satisfacción con el reconocimiento de sus clientes y mencionan los mercados como puntos de especial significado en la construcción colectiva de un entorno alimentario de cercanía.

Otros trabajos adoptan enfoques más cualitativos. Baron y Dimitri (2019), en su estudio sobre los vínculos entre productores y transformadores de alimentos ecológicos certificados en Estados Unidos, encuentran una colaboración estrecha entre pequeños productores de calidad y distribuidores o transformadores comprometidos con el desarrollo de un sistema alimentario más sostenible. Estos dos eslabones de la cadena se benefician de esa colaboración porque los primeros se aseguran unas ventas estables, mientras los segundos ven cubiertas sus necesidades de abastecimiento. González y Cánovas (2021) insisten en el estrecho grado de compromiso entre productores y consumidores implicados en las RAS de la ciudad de Sevilla, que extienden su influencia hasta el centenar de kilómetros para los productos frescos, aunque la mayor densidad de vínculos se localiza a menores distancias de la capital andaluza. Lamine et al. (2019), con un enfoque regional que compara la evolución de los “sistemas agroalimentarios territoriales” de Ardèche y Génova, encuentran un potencial destacable de desarrollo territorial en las RAS, dado que algunas iniciativas de producción agropecuaria minoritaria, localizada y apoyada en variedades específicas llegan a constituir denominaciones de origen protegidas con el paso del tiempo.

Interpretados desde la Figura 1, estos trabajos aportan cuatro ideas principales. Primera, las RAS son iniciativas dignas de estudio debido a su creciente número y su aportación potencial al desarrollo territorial integrado. Segunda, su impacto económico en los territorios donde operan es positivo, pero limitado debido a su escaso tamaño económico y a los débiles efectos inducidos entre sus proveedores y clientes. Tercera, contribuyen a la sostenibilidad ambiental por medios como la recuperación de variedades locales o la aplicación de prácticas que superan los requisitos de las certificaciones oficiales. Y cuarta, debe reconocerse su aportación a la cohesión social y la construcción de comunidad en su entorno territorial gracias a la preferencia por canales cortos de comercialización y al recurso a mecanismos de gobernanza no competitivos.

Este artículo asume este estado de la cuestión, que los resultados presentados en el apartado 3 ratificarán punto por punto. Pero lo interpreta de forma crítica desde el contexto geográfico específico que configuran los territorios frágiles y despoblados. Se argumenta aquí, concretamente, que el aprovechamiento del capital social para reforzar la cohesión social en áreas débilmente pobladas constituye una vía (quizá la única factible en estos espacios) para que los actores del territorio implicados en la TA utilicen el capital natural de forma sostenible y se logre mantener una actividad económica suficiente, en cantidad y calidad, para proporcionar un medio de vida digno a la población local.

Las RAS de las provincias de Salamanca y Zamora proporcionan la base empírica para contrastar este argumento, para lo cual es preciso responder tres preguntas. Primero, respecto al capital y la cohesión social, ¿qué valores impulsan las personas implicadas en estas iniciativas alimentarias? Segundo, respecto al capital natural y productivo y al efecto sobre la sostenibilidad y la competitividad económica, ¿cómo organizan estas RAS sus actividades y qué vínculos establecen con el entorno territorial? Tercero, ¿qué limitaciones imponen el marco geográfico y el entorno institucional a la construcción de una gobernanza territorial más eficaz que impulse la TA en estas provincias?

El resto del artículo se ciñe a la siguiente estructura. El apartado 2 presenta las características geográficas de las provincias de Salamanca y Zamora más vinculadas a los objetivos de este trabajo (apartado 2.1) y expone la metodología de investigación (apartado 2.2). El apartado 3 desarrolla los resultados, estructurados como respuestas a las tres preguntas de investigación. El apartado 4 discute los resultados a la luz del argumento propuesto y el apartado 5 concluye con unas recomendaciones para las políticas públicas, imprescindibles en espacios de gran fragilidad como los que aquí se consideran.

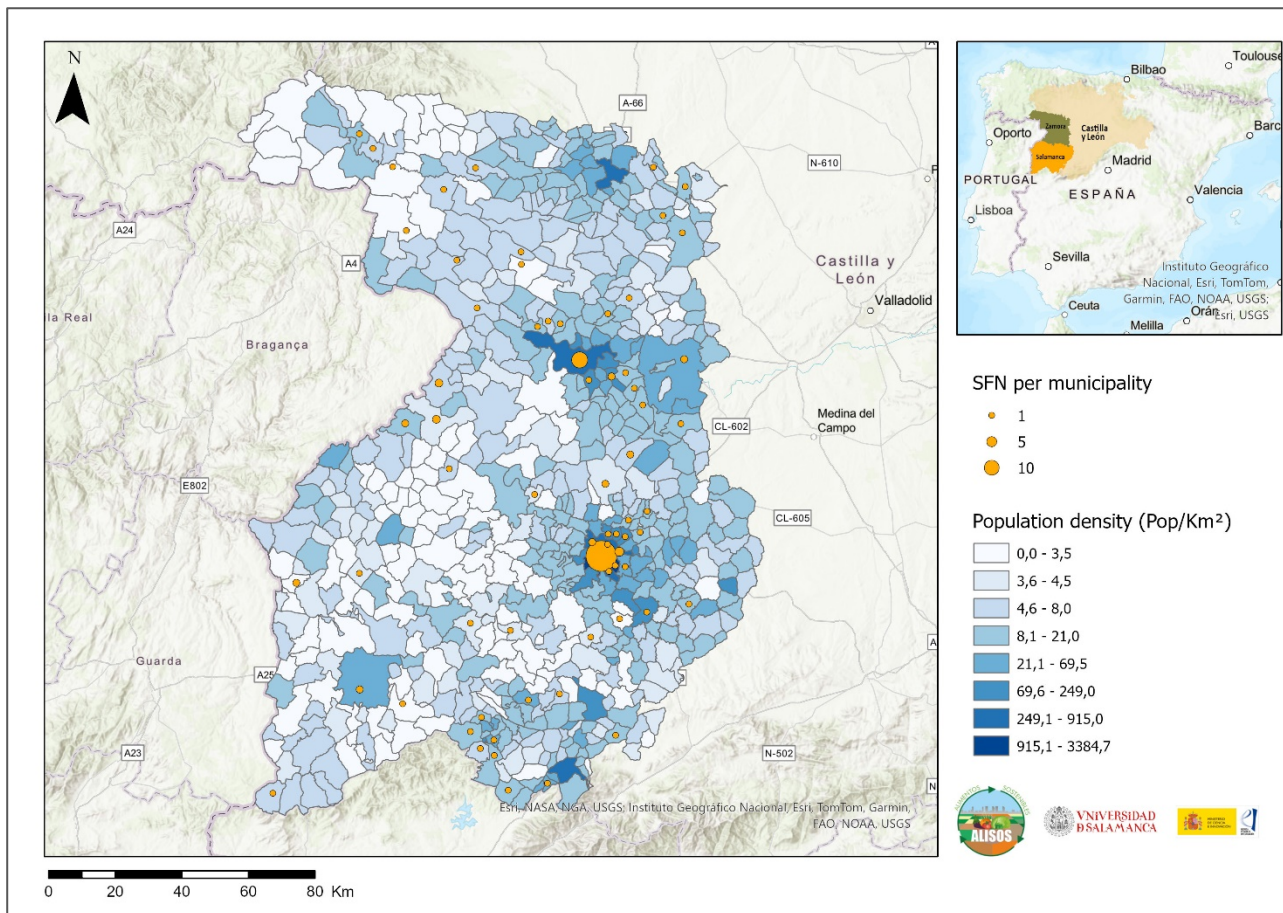
2 Contexto geográfico y metodología de investigación

2.1 Procesos de despoblación y transición alimentaria

Las provincias de Salamanca y Zamora se ubican en el borde occidental de la Submeseta norte, a lo largo de la frontera hispano-lusa (ver Figura 2). Son dos de las nueve que integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la más extensa de España con sus 94 226 km². Ambas provincias se consideran entre las más afectadas del país por los problemas de la despoblación y la baja densidad demográfica. Según los censos de población, han perdido el 31,7 % de su población desde 1950 y el 8,8 % desde 2001, mientras España ha incrementado sus efectivos demográficos

en el 69,5 % y 16 % en esos mismos períodos. Como consecuencia, Salamanca y Zamora representan el 20,7 % de la población de Castilla y León y un ínfimo 1,03 % de la española en 2023.

Figura 2. Densidad demográfica municipal y distribución de las redes alimentarias sostenibles en las provincias de Salamanca y Zamora (2022)



Fuente: elaboración propia a partir del banco de datos del proyecto ALISOS

El grado de ocupación humana es muy débil, con 26,5 habitantes por km² en Salamanca y 15,8 en Zamora para un promedio regional de 25,3 y uno nacional de 96. Zamora, concretamente, es la segunda provincia castellano-leonesa con menor densidad demográfica, por detrás de Soria. Como suele suceder en territorios periféricos, el sistema de asentamientos está desarticulado y la población se concentra en las capitales y su área de influencia inmediata (Pugh y Dubois, 2021): Zamora alberga el 35,6 % de la población provincial y Salamanca el 43,5 %.

Tabla 1. Perfil socioeconómico de las provincias de Salamanca y Zamora

Indicador	Salamanca	Zamora	Castilla y León	España
% sector primario/ PIB (2021)*	4,8	9,0	5,4	2,7
% sector primario/ empleo (2021)*	6,6	12,2	6,8	3,8
% empleo en industria manufacturera (2022)**	6,4	5,3	12,4	9,8
% empleo elaboración alimentos y bebidas / empleo manufacturero (2022)**	58,9	70,1	34,3	22,6
Población de la capital (2022)*	142.412	59.475	297.459	3.332.035
SAU total 2020 (ha)*	893.652	554.264	5.277.137	23.913.682
% SAU / superficie provincial	72,3	52,5	56,0	47,4
Superficie ecológica 2020 (ha)*	3.675	20.079	75.596	1.871.529
% Superficie ecológica / SAU	0,41	3,62	1,43	7,83
Operadores ecológicos (2022)*	132	329	1.887	65.424

Fuente: *Instituto Nacional de Estadística (INE)

& **SIE-Sistema de Información Estadística (Junta de Castilla y León)

Otra característica de las periferias despobladas es su especialización en la producción de energía, materias primas y alimentos. Además del enorme complejo hidroeléctrico gestionado por Iberdrola en ambas provincias, de la presencia de la fábrica de elementos combustibles de la Empresa Nacional de Uranio en Juzbado (Salamanca) y de nuevas fórmulas como las comunidades energéticas (López, 2024), el sector agroalimentario representa uno de los núcleos fundamentales de la economía (tabla 1). El 72,3 % del territorio salmantino y el 52,5 % del zamorano es superficie agraria útil. El porcentaje de empleo y la producción en el sector primario superan netamente la media española. Y el sector manufacturero tiene en la transformación alimentaria su bastión principal, pues concentra el 58,9 % del empleo en Salamanca y un llamativo 70,1 % en Zamora.

Mayor significado tiene la dimensión cualitativa de esta especialización agroalimentaria. Según datos de la Junta de Castilla y León, en ambas provincias se elaboran hasta diecisiete alimentos (vinos, quesos, jamón, legumbres, hortalizas, carnes) avalados por una Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) o Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.), con los efectos positivos para el desarrollo rural que identifica la literatura especializada (ver apartado 1.1). Producciones como los

vinos de Toro o el jamón de Guijuelo gozan de gran prestigio en el segmento de alimentos de calidad y generan un “efecto halo” que favorece a otros productos y al territorio que los genera. La confluencia de diversas figuras de protección ambiental en ambas provincias (Parques Naturales de Arribes del Duero, Las Batuecas-Sierra de Francia, Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto; Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila; Reservas de la Biosfera de Meseta Ibérica y Sierras de Béjar y Francia) refuerza esta asociación entre una naturaleza relativamente poco transformada y unos alimentos con atributos sostenibles y tradicionales.

De hecho, el productivismo no ha sido hegemónico en estas provincias, al menos en la franja occidental de vocación ganadera (dehesas tradicionales, fincas extensivas de razas autóctonas de vacuno y ovino), que encaja con la observación de Parrott et al. (2002) sobre el potencial de este tipo de territorios para convertirse en punta de lanza de lo que hoy se denomina TA. Zamora alberga el 26,5 % de la superficie de cultivo ecológico de Castilla y León (tabla 1), cuando su peso en la SAU total es del 10 %, y en ella radican el 17 % de los operadores certificados de la región. En este campo, Salamanca está más rezagada, con porcentajes del 4,8 % de la SAU y 6,9 % de los operadores, para una participación del 16,9 % en la SAU regional. Los factores institucionales, como se verá, están detrás de este desigual desarrollo de la alimentación ecológica certificada en una y otra provincia.

Una parte de estos operadores ecológicos forma parte del “mercado industrial de alimentos ecológicos” (Sato et al., 2024) y encaminan sus productos a los canales convencionales de distribución, donde los alimentos certificados han incrementado su presencia: según Alimarket (2023), los supermercados concentran el 26 % de las ventas de alimentos ecológicos certificados y enseñas como Carrefour o Alcampo ofrecen más de 2000 referencias en sus lineales. No obstante, otro grupo sustancial de operadores prefiere involucrarse en las RAS.

2.2 Redes alimentarias sostenibles: inventario y caracterización

Esta investigación se inició con la confección de un inventario de iniciativas alimentarias (insumos, producción agropecuaria, transformación, distribución y consumo) ajustadas a la definición propuesta en el apartado 1.2. Este inventario se ha llevado a cabo a lo largo de 2022 para toda la C.A. de Castilla y León como primera tarea empírica del proyecto de investigación que enmarca este artículo; en el verano de 2024 se actualizó dicho inventario y los datos que se ofrecen a continuación proceden de esta actualización.

El inventario consiste en una hoja de cálculo que fusiona información procedente de diversas fuentes: listados oficiales de operadores ecológicos certificados domiciliados en Castilla y León;

listados facilitados por la Fundación Entretantos, organización sin ánimo de lucro que dinamiza la transición alimentaria en Castilla y León y colabora en la investigación; búsquedas sistemáticas en Internet que incluyen el nombre de cada provincia y el tipo de RAS (por ejemplo, León + grupo de consumo, o Valladolid + mercado de productores) y subsiguiente vaciado de los contenidos de sus espacios virtuales (webs, blog, redes sociales); rastreo de los seguidores de los espacios digitales de cada registro; y observaciones de campo en ferias, mercados, tiendas y encuentros relacionados con la alimentación sostenible.

El inventario comprende los siguientes campos de datos: nombre, forma jurídica, localización, dirección electrónica, fecha de fundación, actividad(es) desempeñada(s), tamaño económico, tipo de certificación, canales de abastecimiento y distribución, distribución geográfica de las ventas, ayudas públicas recibidas y participación en organizaciones de promoción de un modelo alimentario local, sostenible o de calidad. No se han podido recoger todos estos datos para todos los casos registrados, lo que impide evaluar con precisión su dimensión agregada o estimar su efecto multiplicador con técnicas cuantitativas como el modelo LM3. Tampoco se puede asegurar que todas las iniciativas se encuentren operativas, porque las fuentes en línea y los listados no siempre estaban actualizados, y la literatura advierte del carácter efímero de este tipo de propuestas económicas (Nicolosi, 2020). Se excluyeron del inventario los operadores ecológicos certificados cuando no se pudo verificar su participación en canales cortos de comercialización, conforme a los criterios de la definición; es el caso de las bodegas que elaboran vinos orgánicos como una referencia comercial más que se añade a los vinos procedentes de uvas de cultivo convencional.

El inventario suma 415 casos para toda la C.A. de Castilla y León, de los que 68 corresponden a Salamanca y 48 a Zamora. Estas provincias muestran las mayores ratios de RAS por 100 000 habitantes de la región (20,9 y 28,7, respectivamente, para un promedio de 17,5). La tabla 2 desglosa la distribución funcional de las RAS inventariadas. Predominan las explotaciones agrícolas y ganaderas (40,5 %), seguidas de la elaboración de alimentos transformados (15,5 %). Estas iniciativas no se limitan a la función de producción, sino que practican la venta directa en mercados periódicos, en pequeñas tiendas especializadas, mediante reparto de cestas a domicilio o a través de grupos de consumo. Algunos productores primarios integran además la fase de transformación (quesos, aceites, caracoles, harinas, mermeladas, miel), siempre en formato de microproducciones artesanas.

Tabla 2. Orientación productiva de las redes alimentarias sostenibles en las provincias de Salamanca y Zamora (2024)

Orientación	Número de casos	% sobre total	Casos entrevistados	% entrevistas sobre total
Insumos (fierras, semillas, abonos, piensos)	6	5,2	2	33,3
Agricultura y ganadería (transformación y venta directa incluidas, en su caso)	47	40,5	10	21,3
Transformación (venta directa incluida, en su caso)	18	15,5	7	39,0
Huertos urbanos	17	14,6	-	0,0
Comercialización colectiva (en línea o en local físico)	1	0,9	1	100
Grupos de consumo	5	4,3	1	20,0
Distribución minorista (mercados de productores, tiendas especializadas)	13	11,2	2	15,4
Hostelería con criterios sostenibles de abastecimiento	8	6,9	1	12,5
Operador integrado (agricultura + transformación + distribución + catering a domicilio)	1	0,9	1	100
Total	116	100,0	25	21,6

Fuente: elaboración propia con datos del inventario del proyecto de investigación ALISOS

El limitado tamaño del mercado de proximidad se refleja en la menor presencia relativa de RAS enfocadas a la distribución y el consumo que, no por casualidad, se concentran en la ciudad de Salamanca y su alfoz (Figura 2). Se incluyen aquí grupos de consumo, tiendas bio, mercados periódicos y establecimientos hosteleros dirigidos al público vegano/vegetariano, con cierto eco entre el público universitario y el turismo de la capital del Tormes. Aquí se concentra también la mayoría de los huertos urbanos, casi todos de promoción municipal y orientación recreativa. Salamanca también acoge la iniciativa más evolucionada, que integra toda la cadena de valor bajo los principios enunciados en la definición: huertas, panificadora, envasadora, mercado de productores, grupo de consumo y servicio de catering para suministro a domicilio a residencias y personas mayores, más una empresa de inserción social que presta servicios (lavandería, almacenamiento, transporte) a todo el entramado, que actúa en la capital y las comarcas occidentales de la provincia.

La localización de las RAS muestra dos argumentos principales. Primero, la concentración en torno a las capitales provinciales, proporcional a sus efectivos demográficos. Segundo, la mayor presencia de casos en la mitad oriental del territorio, donde la densidad de población es algo más elevada y mayor la proximidad a mercados importantes como Valladolid o Madrid. La franja fronteriza, gravemente despoblada, aloja pocas RAS salvo, y esto es relevante, en comarcas con rasgos naturales muy distintivos como Sanabria, Arribes del Duero y la Sierra de Francia, donde se pueden cultivar y elaborar alimentos diferenciados a partir de variedades animales y vegetales aclimatadas a estos entornos ricos en biodiversidad (Pascual & Guerra, 2024).

Desde el punto de vista económico, las 116 RAS son muy heterogéneas. El 41 % están a cargo de trabajadores autónomos y el 13,8 % son sociedades limitadas (las de mayor plantilla y facturación). Las cooperativas, fórmula jurídica muy extendida en la economía crítica, representan el 7,7 %, y hay al menos 9 casos de RAS informales, carentes de personalidad jurídica, una solución frecuente entre los grupos de consumo y los huertos comunitarios. Esos trabajadores autónomos, hombres o mujeres, más sus parejas, son los únicos ocupados en la mayoría de los casos, pues sólo hay constancia de personal asalariado en 15 de ellos. La información fragmentaria recogida hasta la fecha permite estimar en 400 el número de ocupados en estas iniciativas, con un productor de fertilizantes que emplea a 36 personas y el operador integral (en torno a un centenar de contratados en sus distintas actividades), como casos de mayor relieve.

Las explotaciones agrícolas tienen superficies que van desde una a quinientas hectáreas, si bien la mayoría de los agricultores se sitúan por debajo de 10 ha. Las de orientación ganadera, en extensivo todas ellas, presentan superficies mayores, entre 60 y 1200 ha, como es lógico en manejos extensivos. Los elaboradores de alimentos tienen un perfil artesanal: 80 toneladas de abonos, 4,5 de queso, 1,6 de chocolate, 3 de caracoles, 10 000 tarros de mermelada, 40 000 litros de aceite... Los grupos de consumo constan de unas 60 cestas semanales, con alguna excepción significativa que reúne a 200 hogares. Comercio y hostelería presentan superficies de venta pequeñas (100 metros cuadrados en el mejor de los casos) atendidas por sus propietarios. Los mercados periódicos son de iniciativa pública (autonómica, municipal) y reúnen entre 10 y 30 productores, según se ha constatado en el trabajo de campo.

Para recabar información más rica en cantidad de datos y variedad temática, se han mantenido 25 entrevistas con casos representativos de todos los tipos inventariados, controlando también la selección por su localización urbana y rural (Tabla 2). Los huertos urbanos se omitieron porque los pliegos de condiciones prohíben comercializar la cosecha. Las personas entrevistadas eran

propietarias de las RAS o desempeñaban funciones de coordinación. Todas las entrevistas se han grabado en audio digital, previo consentimiento informado, y se han transcrito con el software Transkriptor™; su duración media es de 45 minutos. El contenido de estas entrevistas, más los datos del inventario, sustentan los resultados que se exponen a continuación.

3 Resultados

3.1 Los valores de las redes alimentarias sostenibles

La piedra angular que sustenta las RAS es la búsqueda del bienestar. Desde el lado de la demanda, los compradores de estos alimentos procuran su bienestar a través del cuidado de la salud personal y familiar. Ese cuidado se consigue a través de fórmulas no excluyentes. La compra de alimentos certificados asume que el sello es garantía de propiedades saludables (ausencia de químicos de síntesis en el proceso de producción) y puede no estar acompañada de otras preocupaciones más allá del consumo individual. Ahora bien, esa confianza se puede depositar también en las personas que producen y venden los alimentos a través del contacto directo prolongado (compra en mercados, visitas a las instalaciones) para constatar que el proceso “de la granja/obrador a la mesa” es artesano, tradicional, natural, o respetuoso con el bienestar animal.

Desde el lado de la oferta (agrícola, ganadera o transformadora) se busca de manera principal el bienestar de la tierra o de la naturaleza. Las referencias al cuidado del suelo, el agua y los animales son permanentes y se expresan en prácticas como la reutilización de los residuos orgánicos como abono, la recolección en el punto justo de maduración, la cobertura del suelo con paja, el rechazo a los plásticos, el mínimo uso de maquinaria a motor, el empleo de envases biodegradables... Todo ello va más allá de los requisitos impuestos por los reglamentos de certificación en la mayoría de los casos entrevistados. Es unánime la valoración de sus alimentos como productos “de calidad” que mejoran la salud del planeta a la vez que proporcionan una dieta saludable, nutritiva y sabrosa al consumidor, mayoritariamente urbano.

A cambio de esta conducta respetuosa con el capital natural, los propietarios asumen una rentabilidad económica inferior debido a la reducción de los rendimientos que apareja el uso de estas técnicas y a los costes adicionales de la certificación ecológica. Son frecuentes las menciones a la autolimitación del volumen de producción para mantener su calidad distintiva, pese a las ofertas que algunos artesanos de prestigio reciben desde supermercados de alta gama, por ejemplo. Estas renuncias tienen, lógicamente, unos límites, puesto que la viabilidad financiera es

imprescindible en toda iniciativa económica, y empuja a algunos productores a participar también en canales convencionales de distribución o a prescindir de las certificaciones para reducir costes. En su doble búsqueda del bienestar del planeta y de sus habitantes, productores y consumidores co-construyen un valor compartido imprescindible para comprender el impacto de las RAS: el cuidado del territorio, del mundo rural para mayor precisión. Los consumidores más concienciados (grupos de consumo, asistentes a mercados) no se limitan a comprar alimentos certificados, disponibles también en supermercados, sino que entienden la compra como un acto que contribuye a la conservación de un medio rural vivo y asumen también precios más altos, pero que entienden como justos, o inconvenientes como la limitación del surtido disponible, la compra de cestas cerradas, la recogida de la producción en días y horas fijas, o el trabajo voluntario de gestión de las iniciativas de índole comunitaria.

Este valor que desde el consumo (urbano, de nuevo) se atribuye al origen de los alimentos se multiplica desde la visión de los productores. Entienden que sus prácticas están entrelazadas con la preservación y puesta en valor del legado de sus familias (herencias de tierras o de inmuebles, tradición agropecuaria) y manifiestan su voluntad explícita de permanecer en su pueblo de origen para generar empleo y actividad. Es más, en las comarcas occidentales, muy aquejadas por el éxodo rural y el deterioro de infraestructuras y equipamientos, está extendida la idea de que esas condiciones territoriales adversas dotan de singularidad y autenticidad a los alimentos y se traducen en sabores y texturas especiales que llevan, por así decirlo, “el pueblo al mercado”.

El valor “local” del alimento introduce, pues, el territorio en el vínculo entre oferta y demanda de alimentos elaborados, distribuidos y consumidos con criterios sostenibles. La expresión principal de este valor es la preferencia por los alimentos de proximidad, que reducen la huella de carbono, son más frescos y contribuyen al desarrollo económico y demográfico del entorno de actuación de productores y consumidores.

Salud, sostenibilidad y territorio conforman un triángulo de atractivas oportunidades de negocio. Las entrevistas han permitido identificar RAS que admiten abiertamente haber entrado en este mercado por sus expectativas de rentabilidad. Agricultores que pasan de la producción convencional a la ecológica, la permacultura, la regenerativa; que abandonan los canales largos para especializarse en la venta directa e incrementar sus beneficios, o que añaden eslabones a la explotación y producen sus propios abonos o transforman sus producciones para retener valor; consumidores que abren una tienda bio, una huerta ecológica o un obrador de conservas vegetales. El estilo de vida y la ética personal aparecen también como valores en el campo de la

hostelería, como sucede con los restaurantes veganos o vegetarianos propiedad de personas que siguen esas dietas.

Por tanto, las RAS también constituyen un medio de vida, lo que deberá ser tenido en cuenta a la hora de discutir sus efectos y las limitaciones a las que se enfrentan. Máxime si se tiene en cuenta que el capital intelectual –y, con él, las expectativas y estrategias de los implicados– es elevado en el mundo de las RAS (Pascual & Guerra, 2019). Muchos de sus promotores y consumidores tienen titulaciones superiores, en diversos campos, o han dejado sus anteriores profesiones urbanas para emprender una nueva trayectoria en el medio rural (a menudo, en su lugar de origen) más conforme a sus planteamientos vitales.

Aquí resulta esencial el papel de las mujeres. En 23 de los 60 casos con datos al respecto (38,3 %), aparece una mujer como persona de referencia de la iniciativa (tres de ellos en compañía de un hombre), y 13 de las 25 entrevistas han tenido una mujer como interlocutora (en tres de ellas con su pareja). Aunque coinciden en no haberse sentido menospreciadas en el trato con clientes o proveedores, salvo algún episodio aislado, admiten que su ocupación es compatible con el trabajo doméstico y de cuidados. La residencia rural facilita esta duplicidad de funciones entre las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en RAS de mayor envergadura. Otro nicho de empleo en RAS para las mujeres es el trabajo manual y el ejercicio de tareas comerciales y de gestión administrativa, si bien con frecuencia se trata de empleos a tiempo parcial o de ayudas familiares sin cotización social. Ese papel de la mujer como proveedora de cuidados, atenta a la salud, se manifiesta también en el lado del consumo, pues los supermercados bio entrevistados coinciden en destacar la condición femenina de la mayoría de su clientela, como sucede también en la restauración vegana.

3.2 Organización económica y arraigo territorial de las RAS

Ya se ha mencionado la limitada envergadura económica de estas iniciativas. En algún caso han admitido facturaciones anuales de hasta 500 000 euros, pero también de apenas 17 000, lo que da idea de la precariedad en que se desenvuelven muchas de ellas, sobre todo en el contexto actual de carestía de los combustibles y otros insumos. Para mantener un flujo de ventas que asegure su viabilidad, los productores contienen los precios en detrimento de sus márgenes comerciales y en varios casos los complementan con otras actividades (hostelería, alojamientos rurales, cursos de formación), con otros empleos o con los ingresos de sus parejas, sobre todo en el caso de las mujeres. En cuanto al empleo, predomina el pequeño negocio familiar donde trabajan entre dos y ocho personas, pero sin que todas ellas tengan un empleo formal y estable;

es frecuente que hijos, abuelos y otros familiares desempeñen tareas diversas durante los períodos de mayor carga de trabajo.

Por tanto, el impacto territorial de las RAS en estas provincias no deriva tanto de las magnitudes convencionales (ventas, producción, plantilla), sino de su imbricación en el entorno a través de cuatro vías.

Primera, los encadenamientos hacia atrás. Además de la integración vertical entre producción primaria y transformación que practican 27 iniciativas, la tendencia general es la compra de semillas y materias primas (carne, leche, fruta, hortalizas, cereales) en el entorno provincial o regional; lo mismo sucede con otros insumos y servicios: envases, etiquetas, palets, transporte (sobre todo de frío), webs y sistemas de venta electrónica. Todo ello, aún en cuantías limitadas, implica una aportación al tejido económico de estas provincias, dada su preferencia por unos pocos proveedores de confianza. Pero también se benefician los principales centros urbano-industriales de Castilla y León, puesto que Valladolid, León o Burgos son mencionados con frecuencia como puntos de aprovisionamiento.

Segunda, los encadenamientos hacia adelante. Las ventas tienen un marcado carácter multicanal. Solamente un productor vende en supermercados convencionales; los demás descartan esta opción por falta de volumen y por el rechazo a los intermediarios y sus condiciones de precios y suministro. En cinco casos se han registrado ventas a países europeos, siempre de productos *premium* no perecederos (aceite, queso, legumbre) y en proporciones pequeñas respecto al total de facturación. Además del suministro al comercio urbano especializado en alimentos bio, y en consonancia con la definición de RAS, el grueso de los ingresos procede de la venta directa, sea en finca/obrador, en ferias y mercados, en grupos de consumo o a través de pedidos a domicilio. Esto significa que las RAS productoras proporcionan alimentos locales, saludables y sostenibles a un nicho de hogares en ambas provincias. Los mercados y ferias periódicas son considerados doblemente ventajosas, pues la ausencia de intermediarios permite al vendedor fijar un precio rentable y aumentar el beneficio por unidad de producto, hasta el punto de que algunos entrevistados admiten que sin este canal se verían obligados a cerrar. Pero ferias y mercados constituyen también ámbitos de relación y creación de comunidad entre productores, y entre éstos y sus clientes, lo cual estabiliza los ingresos a medio plazo. Algunos productores señalaban haber reducido sus canales de venta hasta limitarlos a este canal por estas ventajas tangibles e intangibles. Estas ventajas son a la vez las desventajas percibidas en el canal online: abre las puertas a otras

regiones españolas, pero implica pérdida de contacto humano, costes de transporte, problemas técnicos (roturas, fallos en la cadena de frío) y exige dedicación específica a gestionar los pedidos.

Tercera, y muy significativa, los vínculos comerciales y sociales entre las RAS entrevistadas. Se han podido documentar muchas conexiones entre los agricultores, ganaderos y artesanos inventariados: compraventa de piensos, abonos, semillas, trigo, frutas o corderos; trabajo a maquila de los obradores para los agricultores; compras conjuntas de envases para abaratar precios; coordinación en el surtido que cada productor ofrece en los mercados; o puntos de venta en finca con productos de otras RAS cercanas que complementan la oferta propia. Estas conexiones suponen un flujo monetario que alimenta el tejido de RAS y a la vez cohesiona a los actores, reforzando el capital productivo y social de estos territorios y facilitando el aprovechamiento sostenible de su capital natural.

Cuarta, las relaciones con las Administraciones Públicas. En este punto, la diferencia entre Zamora y Salamanca es notable. Todas las entrevistas realizadas en Zamora destacan el apoyo al sector ecológico desplegado por la Diputación Provincial desde comienzos del siglo XXI: asesoramiento para la conversión ecológica, organización anual de la feria Ecocultura (una de las más importantes del sector en España), apoyo a los mercados de productores, respaldo a la constitución de la asociación PINZA (Productores Independientes de Zamora) y su marca colectiva EXQUISITEZA, para la promoción comercial de alimentos no amparados por indicaciones geográficas de calidad... Ese apoyo en forma de conocimiento y habilitación de espacios de encuentro se complementa con la financiación aportada por los Grupos de Acción Local para inversiones en maquinaria para las RAS de transformación. En Salamanca, al contrario, falta este respaldo institucional y, según los actores entrevistados, ese desinterés se plasma en una patente debilidad del entramado de las RAS. La Universidad de Salamanca es mencionada como un actor con alguna influencia gracias al apoyo prestado por algunos investigadores a la conversión ecológica de varios ganaderos de ambas provincias. Y el operador integral ha logrado adquirir un tamaño suficiente para ganar licitaciones públicas y distribuir menús a domicilio a personas mayores en la capital y a pequeñas residencias del medio rural.

3.3 Los factores limitantes y los obstáculos para la gobernanza

El mismo esquema de fortalezas utilizado en el apartado anterior sirve para considerar las debilidades de estas iniciativas, que se traducen en una merma de su contribución al desarrollo territorial por las dificultades para tejer mecanismos eficaces de gobernanza.

El reducido tamaño de casi todas las RAS tiene consecuencias muy negativas. No sólo por la autoexplotación a que se someten los propietarios para mantener su medio de vida, o por la falta de capital para invertir en mejoras técnicas y de gestión. Más grave es su incapacidad para competir con las grandes cadenas que venden alimentos “locales” o “bio” a precios muy inferiores debido a su poder de compra, y con las distribuidoras de alimentos ecológicos certificados que abastecen a las tiendas bio de las ciudades de un extenso surtido, con el consiguiente ahorro de costes de transacción. Estos intermediarios están erosionando el vínculo entre comercio minorista urbano y producción artesana rural, aumentando además la distancia recorrida por los alimentos.

Este problema de las distancias se extiende también a los encadenamientos hacia atrás. Es común la adquisición de insumos y materias primas fuera de ambas provincias e incluso de Castilla y León, pese a su extensa superficie. Azúcar o cacao se importan desde Sudamérica, aunque se opta por adquirir productos de comercio justo y compensar, en parte, el impacto ecológico del transporte. Las condiciones climáticas de la región también explican la compra de cítricos en el Mediterráneo, mientras que la insuficiente oferta provincial/regional de cereales, semillas, plántones o abonos se traduce en compras desde Cantabria, Navarra, País Vasco, Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha. Los entrevistados admiten esta contradicción práctica con sus valores de proximidad y sostenibilidad, pero la justifican por la necesidad de ingresos, y se muestran dispuestos a adquirir más producto de cercanía cuando la oferta lo permita en cantidad, calidad y precio.

Algo parecido sucede con los encadenamientos hacia adelante. Ni las provincias analizadas, ni la región de Castilla y León, por su baja densidad de población y su menguado poder adquisitivo, generan un umbral de demanda capaz de sustentar un aumento del número y tamaño de estas iniciativas que reduzca el precio final de sus alimentos. A tenor de las entrevistas, los factores culturales juegan también un papel restrictivo, sobre todo en la conservadora provincia de Salamanca, donde parece muy extendido el recelo hacia los manejos (agro)ecológicos, sobre todo en las comarcas orientales de vocación agraria y mentalidad más productivista, y los planteamientos vegetarianos/veganos apenas calan frente a la poderosa imaginaria de la dehesa. El envejecimiento de la población es otro elemento adverso por su apego a las dietas tradicionales; la gerente de una huerta de cierto tamaño indicaba que la mayor parte de sus clientes fijos residen en el alfoz de Salamanca, cuyos municipios presentan edades medias de entre 35 y 45 años, sensiblemente inferiores a la capital (48,31) y la provincia (48,76). Con estos condicionantes para las ventas de proximidad, las RAS deben asumir altos costes de transporte y tiempos de entrega

para vender sus productos en el resto de Castilla y León y en otras regiones españolas. Esos largos traslados producen, además, mermas en los pedidos y la consiguiente insatisfacción de los clientes, que ha provocado el abandono de prometedoras líneas de negocio y frena el crecimiento de la venta online.

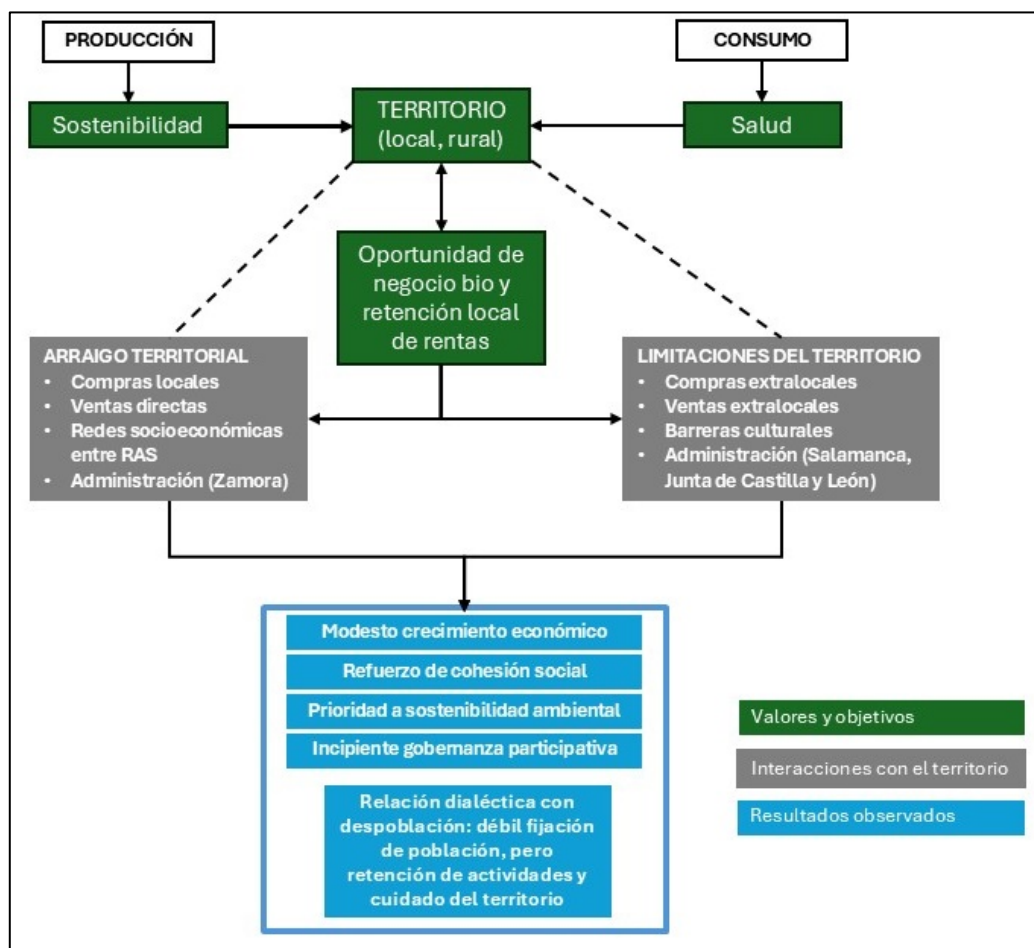
De cara a la construcción de una gobernanza territorial más eficaz, los vínculos entre las RAS podrían ser más estrechos y eficaces, pero topan con tres obstáculos. Cierta individualismo por parte de algunos entrevistados, en todas las etapas de la cadena de valor. Ausencia de intereses comunes entre productores próximos para, por ejemplo, coordinar la logística de pedidos y envíos. Y desacuerdos radicales entre los productores certificados y los que rechazan esa fórmula por su coste, su reglamentación, o su supuesta inutilidad: los primeros no quieren compartir espacios de venta con los segundos, quienes a su vez adoptan un discurso de producto “natural” o “tradicional” para equipararse con los atributos asociados a los alimentos certificados.

Si estas carencias entorpecen la gobernanza entre particulares, es general la crítica -amarga con frecuencia- al papel de las Administraciones. Excepción hecha de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, sus homólogos en Salamanca y la Junta de Castilla y León, así como los organismos certificadores, la PAC y, en última instancia, la Unión Europea como reguladora del sector, son señalados como obstáculo principal para el desempeño cotidiano del trabajo por el exceso de burocracia y la lentitud de los trámites, que también ha provocado la renuncia a proyectos nuevos o de diversificación de los activos. Quienes asumen la certificación de mejor grado la entienden como una vía de acceso a puntos de venta de mayor exigencia (tiendas bio, hostelería), pero se trata de personas cuyo nivel formativo les capacita para la gestión de requisitos y documentación.

4 Discusión

Estos resultados se interpretan ahora a la luz de los conceptos que enmarcan esta investigación (Figura 3) y de su relación dialéctica con la despoblación que aqueja a estos territorios. Respecto al capital territorial y sus componentes (capital natural, social, productivo e intelectual, figura 1 de nuevo), se ha mostrado que el capital natural específico de estas provincias poco pobladas es la base de las RAS localizadas en el medio rural.

Figura 3. Valores fundacionales e impactos territoriales de las redes alimentarias sostenibles de Salamanca y Zamora



Fuente: elaboración propia

Ese capital no se limita a las variedades vegetales y animales locales preservadas gracias a la baja presión demográfica, sino también al atractivo simbólico asociado a paisajes singulares como los Arribes del Duero o las dehesas del Campo Charro salmantino. Ese simbolismo, unido al apego por el medio rural y el deseo de revitalizarlo (desde dentro) o incentivarlo (desde la ciudad), activa el capital social en torno a valores de protección de la naturaleza y bienestar personal. Estos valores convergen en el territorio, con iniciativas que tienen la vocación explícita de defender el mundo rural y reconectar campo y ciudad para hacer efectivo el derecho a una alimentación sana y asequible procedente de un medio rural que ofrezca condiciones de vida dignas a sus habitantes, pues se entiende que esa dignidad constituye el objetivo último de cualquier tentativa de recuperación demográfica territorial.

Estos valores son enunciados en las entrevistas por unos actores con formación y experiencia cuyo capital intelectual moviliza el capital social y mitiga la endeblez del capital productivo (constatada

en el trabajo de campo) mediante una tupida red de vínculos de compraventa y cooperación y, en el mejor de los casos, integrando verticalmente la producción para retener valor económico.

En cuanto a los resultados del desarrollo territorial (figura 1), las RAS preservan la sostenibilidad ambiental a través de la certificación o del manejo agroecológico de animales, plantas, agua y suelos. Sin embargo, las condiciones territoriales, asociadas a la despoblación, imponen limitaciones significativas a la búsqueda de un modelo alimentario de proximidad a causa de la baja densidad demográfica, la dispersión geográfica de la oferta y la demanda (que implica elevados costes logísticos) y el ajustado poder de compra de la población de mayor edad, muy dependiente de las pensiones y muy conservadora en sus hábitos alimentarios.

Su contribución al dinamismo económico y demográfico de Zamora y Salamanca es muy pequeña, aunque su papel en las zonas rurales más frágiles no deba ser ignorado. Sostienen la actividad agropecuaria, aprovechan el tirón turístico de algunas comarcas o de las capitales provinciales, y adquieren insumos a escalas que van desde lo local a lo nacional o internacional, donde también dirigen sus ventas. El predominio de canales comerciales cortos ahorra costes y captura rentas para estas áreas desfavorecidas; de ahí su insistente demanda a la Administración para que apoye la venta en proximidad geográfica y también social.

Es justamente en el terreno de la cohesión social donde cabe una valoración más positiva. Los vínculos comerciales entre estas RAS son, sobre todo, vínculos personales basados en la confianza; su fortaleza es mayor cuando operan en proximidad geográfica o los promotores capitalizan su arraigo familiar en el territorio. Ya se ha señalado que las RAS parecen abrir una tímida vía al rejuvenecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias y de la población rural. Desde la ciudad, las RAS más convencionales y cercanas al consumidor final (supermercados bio, hostelería responsable) parecen más centradas en la salud personal, pero las que integran ciudad y campo (grupos de consumo, mercados, sistemas de cestas a domicilio, el operador integral de Salamanca) expresan su grado de compromiso con el desarrollo rural a través de la compra de productos saludables y de proximidad procedentes de una agricultura familiar y campesina que los actores más conscientes consideran imprescindible para la sostenibilidad integral del mundo rural. Con todo, las reticencias a la cooperación, de raíz económica y cultural, suponen una barrera para progresar en este objetivo.

Estas reticencias se trasladan también al ámbito de la gobernanza participativa y al papel de las Administraciones. En este punto los avances son desiguales, con clara ventaja para la provincia de Zamora, con Diputación y Ayuntamiento de la capital a la cabeza, mientras la renuencia institucional

imperera en Salamanca, excepción hecha de unas pocas localidades comprometidas a causa de la convicción expresa de sus regidores (Miranda de Azán, San Martín del Castañar, Juzbado). Sólo el empeño del operador integral ha logrado captar fondos públicos para la alimentación saludable de la población mayor en las comarcas noroccidentales de la provincia. Desde abajo, los productores se están organizando en asociaciones de reciente constitución (ASOESA en Salamanca y Bioproeza en Zamora) para ganar interlocución con ayuntamientos y diputaciones en tres materias prioritarias: impulso a los mercados y ferias, compra pública de alimentos sostenibles para comedores colectivos y campañas educativas para concienciar a la población, sobre todo joven, sobre las ventajas de este tipo de alimentos.

Estos efectos de las RAS sobre el desarrollo territorial de las provincias de Salamanca y Zamora se corresponden con los valores que promueven estas iniciativas. Aunque constituyen un modo de vida para muchos de los involucrados, sus objetivos no son únicamente económicos o, mejor dicho, lucrativos. Con esa premisa, parece difícil esperar un impacto económico sustancial. La autolimitación del tamaño de muchas RAS es congruente con su orientación hacia la sostenibilidad ambiental, la salud y la cohesión social y territorial, pero penaliza su aportación potencial al crecimiento del empleo y, con él, de la población. Estos resultados apuntalan el argumento propuesto más arriba, según el cual las RAS activan el capital social de estas zonas débilmente pobladas para aprovechar su capital natural específico y logran sus avances principales en el terreno de la cohesión social. Sus impactos económicos y demográficos son limitados en términos absolutos, pero adquieren un significado no desdeñable si se los sitúa en el adverso contexto territorial de Zamora y Salamanca, que compromete la rentabilidad de estas iniciativas por los factores ya mencionados.

5 Conclusiones

La transición alimentaria, o agroalimentaria, es uno de los frentes de avance de la transición ecológica. Entre los varios procesos y actores que la impulsan, la construcción de un modelo alimentario justo, participativo, localizado y respetuoso con el medio natural merece una atención especial por su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible de los espacios rurales. Los valores de las redes alimentarias sostenibles que, desde el campo y la ciudad, movilizan el capital natural, social, intelectual y productivo del territorio, intentan hacer compatible la competitividad económica con la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la participación de los actores públicos y privados en la toma de decisiones.

En territorios frágiles como las provincias de Salamanca y Zamora, las RAS deben ser objeto de consideración precisamente por la escasa presencia de actores capaces de impulsar procesos de desarrollo autocentrado, más patente aún en las comarcas rurales más despobladas y necesitadas de apoyo externo y cohesión interna. El análisis de la información cuantitativa y cualitativa recabada sobre estas iniciativas en ambos territorios ha permitido constatar que su impacto estrictamente económico es modesto, pero no marginal. Los nexos económicos entre iniciativas se sustentan en un capital social e intelectual tejido en proximidad y, a su vez, refuerzan la cohesión social en unas comarcas envejecidas, despobladas y alejadas de los nodos rectores del territorio. Así se logra que los recursos naturales y paisajísticos sean aprovechados para elaborar unos alimentos portadores de bienestar para las personas, siempre en condiciones de respeto al medio ambiente. Desde esta perspectiva, las RAS merecen un lugar propio en las políticas de revitalización desplegadas en este tipo de territorios.

Las condiciones territoriales, con todo, limitan el desempeño de las RAS, en forma de carencia de insumos, altos costes de transporte, debilidad y dispersión de la demanda, barreras culturales y un desigual respaldo de las administraciones públicas. No obstante, se han encontrado indicios suficientes para que el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza pueda rendir resultados significativos, una vez sentadas las bases sociales y ecológicas de las RAS. Entre los actores privados deberían habilitarse más espacios de cooperación (compras, ventas, logística), como tímidamente propone el incipiente movimiento asociativo en las dos provincias. Entre las administraciones locales, el ejemplo de Zamora puede funcionar como muestra de buenas prácticas por su visión integrada y sostenida en el tiempo. Y el caso del operador integral de Salamanca constituye una prueba patente de que el salto de escala desde la producción/consumo de nicho hasta la consecución de un impacto apreciable pasa por la articulación de espacios de entendimiento entre actores públicos y privados, es decir, por la construcción de una gobernanza territorial capaz de convertir la transición alimentaria en una palanca de desarrollo sostenible y en una herramienta más para el diseño de medidas integrales de revitalización demográfica en territorios severamente afectados por la despoblación.

Agradecimientos: Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i «Gobernanza Urbano-Rural y Transición Alimentaria en Regiones de Baja Densidad: Castilla y León» (2021-2025), Referencia PID2020-112980GB-C21, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. Entidades participantes: Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de Heidelberg y Fundación Entretantos. Se trata de un subproyecto integrado en el Proyecto Coordinado “Las redes

alimentarias sostenibles como cadenas de valores para la transición agroecológica y alimentaria. Implicaciones para las políticas públicas territoriales”. Agradecemos también su tiempo y su entusiasmo a las personas entrevistadas para la elaboración de este artículo; también las observaciones de los/as evaluadores/as, siempre oportunas y que han ayudado a mejorar el manuscrito original.

Declaración responsable: Las/os autoras/es declaran que no existe ningún conflicto de interés con relación a la publicación de este artículo. Las tareas se han distribuido de la siguiente manera. El artículo ha sido coordinado por J.L. Sánchez. Los tres autores/as han aportado datos al inventario de iniciativas, han efectuado entrevistas semiestructuradas y han transcrito las grabaciones. T. Sierra ha elaborado la cartografía y las tablas de datos. L. Moro y J.L. Sánchez son responsables del análisis cualitativo de las entrevistas y de la redacción del artículo.

Bibliografía

Albertos Puebla, J.M., Caravaca Barroso, I., Méndez Gutiérrez del Valle, R., & Sánchez Hernández, J.L. (2004). Desarrollo territorial y procesos de innovación socioeconómica en sistemas productivos locales (pp.15-60). In J.L. Alonso Santos, J. Aparicio Amador & J.L. Sánchez Hernández, J.L. (Eds.), *Recursos territoriales y geografía de la innovación industrial en España*. Ediciones Universidad de Salamanca.

ALIMARKET (2023). *Informe Retail Bio España 2023*. Alimarket.

Banzo, M., Beaurain, Ch., Del'homme, B., & Lemarié-Boutry, M. (2024). *Les projets alimentaires territoriaux. Vers des actions collectives*. Quae.

Baron, H., & Dimitri, C. (2019). Relationships along the organic supply chain. *British Food Journal*, 121(3), 771-786. <https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-0779>

Comisión Europea (en línea). El Fondo de Transición Justa. In *Fuentes de financiación de la transición justa*. European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_es

Crescenzi, R., De Filippis, F., Giua, M., & Vaquero-Piñeiro, C. (2022). Geographical Indications and local development: the strength of territorial embeddedness. *Regional Studies*, 56(3), 381-393. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1946499>

European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2021). *Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs) – Final report*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2762/396490>

EUROSTAT. *Shedding light on energy in the EU - 2023 edition*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/energy-2023>

Feagan R. (2007). The place of food: mapping out the 'local' in local food systems. *Progress in Human Geography*, 31(1), 23-42. <https://doi.org/10.1177/0309132507073527>

Filippini, R., Arfini, F., Baldi, L., & Donati, M. (2023). Economic Impact of Short Food Supply Chains: A Case Study in Parma (Italy). *Sustainability*, (15), 11557. <https://doi.org/10.3390/su151511557>

González de Molina, M., & López García, D. (2021). Principles for designing Agroecology-based Local (territorial) Agri-food Systems: a critical revision. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 45(7), 1050-1082. <https://doi.org/10.1080/21683565.2021.1913690>

González Romero, G., & Cánovas García, F. (2021). Territorio y redes alimentarias alternativas: experiencias en la ciudad de Sevilla. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 67(3), 389-415. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.660>

Hughes, D.W. e Isengildina-Massa, O. (2015). The economic impact of farmers' markets and a state level locally grown campaign. *Food Policy*, (54), 78-84. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.05.001>

Kłoczko-Gajewska, A., Malak-Rawlikowska, A., Majewski, E., Wilkinson, A., Gorton, M., Tocco, B., Wąs, A., Saïdi, M., Török, Á., & Veneziani, M. (2024). What are the economic impacts of short food supply chains? A local multiplier effect (LM3) evaluation. *European Urban and Regional Studies*, 31(3), 281-301. <https://doi.org/10.1177/09697764231201572>

Lamine, C., Garçon, G., & Brunori, G. (2019). Territorial agrifood systems: A Franco-Italian contribution to the debates over alternative food networks in rural areas. *Journal of Rural Studies*, (68), 159-170. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.11.007>

López Tárraga, A.B. (In Press). Comunidades energéticas en el medio rural: el caso de Efiduero Energy (Zamora, Salamanca y norte de Portugal). In J.L. Sánchez, C. Torres, I. Aguado, R. Mecha & J. Prada (Coords.), *Estrategias territoriales y productivas en un contexto de cambio global*. Asociación Española de Geografía.

Mouat, M., Prince, R., & Roche, M.M. (2019). Making Value Out of Ethics: The Emerging Economic Geography of Lab-grown Meat and Other Animal-free Food Products. *Economic Geography*, 95(2), 136-158. <https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1508994>

Mundler, P., & Laughrea, S. (2016). The contributions of short food supply chains to territorial development: A study of three Quebec territories. *Journal of Rural Studies*, (45), 218-229. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.04.001>

Nicolosi, E. (2020). Counterspaces against the odds? The production and emancipatory potential of alternative spaces. *Geoforum*, (108), 59-69. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.11.016>

Parrott, N., Wilson, N., & Murdoch, J. (2002). Spatializing quality: regional protection and the alternative geography of food. *European Urban and Regional Studies*, 9(3), 241-261. <https://doi.org/10.1177/096977640200900304>

Pascual Ruiz-Valdepeñas, R., & Guerra Velasco, J.C. (2019). La base social y las formas de organización de las prácticas económicas alternativas: una aproximación a su caracterización, estrategias, potencialidades y límites (pp.233-255). In J.L. Sánchez Hernández coord., *Espacios y prácticas económicas alternativas en las ciudades españolas*. Thomson-Reuters Aranzadi. <http://hdl.handle.net/10366/144026>

Pascual Ruiz-Valdepeñas, R., & Guerra Velasco, J.C. (In Press). Economías y espacios para la transición alimentaria: actores y redes alimentarias sostenibles en Castilla y León (España). In J.L. Sánchez, C. Torres, I. Aguado, R. Mecha & J. Prada (Coords.), *Estrategias territoriales y productivas en un contexto de cambio global*. Asociación Española de Geografía.

Potente Castro, M. (In Press). Legislación *food-tech* en Europa: situación actual y consecuencias geográficas. In J.L. Sánchez, C. Torres, I. Aguado, R. Mecha & J. Prada coords., *Estrategias territoriales y productivas en un contexto de cambio global*. Asociación Española de Geografía.

Pugh, Rh., & Dubois, A. (2021). Peripheries within economic geography: Four “problems” and the road ahead of us. *Journal of Rural Studies*, (87), 267-275. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.007>

Reckinger, R. (2022). Values-based territorial food networks. Qualifying sustainable and ethical transitions of alternative food networks. *Regions & Cohesion*, 12(3), 78-109. <https://doi.org/10.3167/reco.2022.120305>

Renting, H., Marsden, T., & Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. *Environment & Planning A*, 35(3), 393-411. <https://doi.org/10.1068/a3510>

Rodríguez-Pose, A., & Bartalucci, F. (2023). The green transition and its potential territorial discontents. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, rsad039, <https://doi.org/10.1093/cjres/rsad039>

Sage, C.L. (2022). A Research Agenda for Food Systems. In C.L. Sage (Ed.), *A Research Agenda for Food Systems* (pp. 3-37). Edward Elgar.

Sánchez Hernández, J.L. (2009). Redes alimentarias alternativas: concepto, tipología y adecuación a la realidad española. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (49). <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/781>

Sato, F., Calvet-Mir, L., & Villamayor-Tomás, S. (2024). Socially embedding the food system: the role of alternative food initiatives to build sustainable food models. *Local Environment*, 29(2), 187-205. <https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2279553>

Saul, D., Newman, S., De Phelps, C., & Liao, F. (2022). Exploration of values and agency in place-based food systems. *Journal of Rural Studies*, (89), 337-347. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.12.010>

Whitworth, E., Druckman, A., & Woodward, A. (2017). Food scares: a comprehensive categorisation. *British Food Journal*, 119(1), 131-142. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2016-0263>